



Joaquín Azagra, Joan Romero

*Desde
la margen izquierda*

Joaquín Azagra, Joan Romero

Desde la margen izquierda

Prismas

3

Joaquín Azagra, Joan Romero

Desde la margen izquierda

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© Los autores, 2012

© De esta edición: Universitat de València, 2012

Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13 – 46010 València

Diseño de la colección: Inmaculada Mesa
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera

Ilustración de la cubierta:
Daniel Muñoz, *Des de l'esquerra* (2012)
ISBN: 978-84-370-8922-5

Índice

PREFACIO	9
I. LA RECOMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA	25
De la reconversión industrial a la burbuja inmobiliaria	26
Una nueva geografía social	38
Verano de 2008: de repente, la crisis	63
II. LA APARENTE ANOMALÍA VALENCIANA	75
1983-2007: ¿un reacomodo político?	76
Los territorios del voto	91
Clase social y voto	101
Las coordenadas políticas de una sociedad segmentada	111
III. LA DIMENSIÓN DE LOS CAMBIOS.	
UNA MIRADA A EUROPA	123
Perplejos en el presente, inseguros ante el futuro	124
Europa ante sus retos. ¿Es suficiente su actual agenda de reformas?	130
La paradoja de la socialdemocracia europea en su «Edad de Bronce»	146
Gobernar el presente. Propuestas desde la margen izquierda	162
IV. DE VUELTA A CASA. UN LARGO E INCIERTO	
EPÍLOGO VALENCIANO	207
La polarización política no es el camino	209
¿Hacia dónde orientar los cambios en una situación excepcional?	216
¿Puede el socialismo valenciano nuclear una coalición electoral suficiente y liderar estos cambios?	239
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	249

PREFACIO

Este ensayo, escrito desde la margen izquierda y en la periferia de una sociedad europea desconcertada y atemorizada, quiere ocuparse de lo que preocupa a la mayoría de sus ciudadanos: por qué las cosas no acaban de ir bien en Europa, por qué no se atisba el final del túnel, por qué muchos jóvenes europeos ven el futuro demasiado lejos y por qué han aumentado las diferencias económicas entre unos pocos y la mayoría. Al respecto, se analizan algunos de los cambios y paradojas de este nuevo tiempo y cómo son entendidos por la socialdemocracia europea. Una nueva era que a decir de muchos deja atrás modelos, relatos e incluso formas de entender el progreso de las sociedades. Un nuevo tiempo marcado por varias rupturas y cambios profundos que se irían gestando desde los años ochenta del siglo XX y que entrarían en una fase de vertiginosa aceleración histórica desde inicios de los años noventa. El resultado es que hoy casi nada es igual que hace treinta años. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y el lugar que hoy ocupa Europa en el mundo es distinto. Y cuando se pregunta a los europeos muchos opinan que el momento presente es peor que el de hace unas décadas y además no tienen buenas sensaciones respecto a lo que depara el futuro.

Pero también nos ocupamos de una cuestión que preocupa a muchos ciudadanos que se sienten progresistas: por qué

la izquierda tiene más dificultades que en el pasado para hacerse escuchar y para conseguir amplios apoyos ciudadanos. Por esa razón se analizan las paradojas que hoy afronta la socialdemocracia europea. Mientras en muchas partes del mundo vuelve a hablarse de primavera, el socialismo democrático vive su particular otoño. Mientras se asiste a la mayor ofensiva política e ideológica de las últimas décadas contra el mantenimiento del Estado del Bienestar, mientras se ensanchan las diferencias como nunca desde los años setenta entre quienes cada vez tienen menos y una minoría de privilegiados, la socialdemocracia tiene dificultades para hacerse escuchar, para hacerse visible y para obtener la confianza de una mayoría social.

Sugerimos al lector o lectora un itinerario que toma como punto de partida la Comunidad Valenciana, para desde el análisis de sus cambios económicos, sociales y políticos, hacer un recorrido por los grandes debates, los retos y la nueva agenda de la socialdemocracia en Europa, para finalizar preguntándonos en voz alta algunas de las cuestiones más repetidas en nuestro entorno cotidiano ¿Lo que ocurre en el País Valenciano es una anomalía? ¿Por qué la democracia se ha degradado tanto? ¿Qué se puede hacer para acabar con un estado de cosas que obliga no ya a hablar del futuro de la socialdemocracia, sino, antes que eso, de la democracia? ¿Es posible que la izquierda plural pueda obtener una mayoría electoral en un futuro no muy lejano? ¿Sobre qué bases puede hoy cimentarse un proyecto alternativo al modelo conservador?

Seguramente no ofrecemos respuestas contundentes y redondas. No lo pretendemos. Entre otras muchas cosas porque no aspiramos más que a compartir las propias dudas de dos personas a las que el corazón les sigue latiendo en el centro-izquierda pero que cada día intentan desarrollar una capacidad de empatía, hoy tan necesaria como escasa

en una sociedad demasiado polarizada. Lo dice Maalouf, cuando afirma que hemos entrado en el siglo XXI sin brújula. A lo máximo que se puede aspirar, por tanto, en este incierto y brumoso inicio de milenio, es a intentar observar de dónde viene la dirección del viento y comprender algunas de las corrientes de fondo que animan, impulsan o atentan a nuestras sociedades. Las certezas y las afirmaciones contundentes quedan reservadas para los fundamentalistas, que hay muchos y de todos los colores, para los profesionales de la estrategia de la polarización, para aquellos que cada día trabajan en la fábrica del odio, para los que se dedican a recrear muros interiores entre las personas. Por eso aquí solo hay voluntad de compartir interrogantes, eso sí formulados con honestidad intelectual desde algunos principios y valores que nos han acompañado desde la juventud.

¿Por qué se habla tanto de inicio de nueva época? ¿Por qué están las aguas tan revueltas en Europa? Al poco de estallar la crisis, vaticinaba Beck la génesis de una situación prerrevolucionaria causada por el aumento de la desigualdad. En cierta medida, las explosiones de ira democrática en países árabes o el avance del radicalismo indigenista en América Latina avalarían el augurio. Pero otra cosa es Europa. Los disturbios londinenses, la revuelta social griega, el movimiento de los «indignados» españoles o israelíes, la protesta romana, algunas huelgas generales y otros episodios análogos son de incierto y debatido diagnóstico. Manifiestan un obvio clima de malestar pero en modo alguno una propuesta de sustitución del sistema económico y social. Al contrario, da la impresión de que al constatar la súbita interrupción del crecimiento, nuestra rica y desigual Europa ha reaccionado más asustada que irritada y pese a que la crisis se ha gestado en un sector tan emblemático del capitalismo como el bancario, se muestra más proclive a reafirmarlo que a sustituirlo. Siendo la crisis una eficaz trituradora de gobiernos, la evidencia es que elec-

ción tras elección, país tras país, los votos han dado la espalda a la socialdemocracia, han reforzado a la derecha e incluso ampliado la presencia de la extrema derecha. Sí, la crisis tiene potencial para seguir derribando gobiernos (ahora los de derechas) pero ello no obsta para afirmar que hasta el momento el castigo más duro ha recaído en la socialdemocracia.

A la sensación de fin de época en Europa se añade la percepción de fin de ciclo de una socialdemocracia que ofrece una imagen melancólica y un tanto desnortada. Carece de respuestas propias. No hay más que observar el clamoroso silencio de la Internacional Socialista tanto en cuestiones geopolíticas como económicas. Respecto a éstas los socialistas parecen haber asumido que no hay justicia sin crecimiento y, fracasados los tímidos ensayos iniciales de políticas keynesianas, han aceptado ajustes salariales, flexibilizaciones laborales y recortes de gasto público cuya diferenciación con las recetas conservadoras se hace muy difícil para sus electores. El socialismo no tiene un proyecto que subraye sus señas de identidad. Tal vez porque no se ha entendido, pese a la literatura al respecto, que esta sociedad postindustrial, del riesgo, posmoderna, posmaterialista, posdemocrática, líquida o como quiera llamársele, ha cambiado profundamente. La vieja estructura de clases sobre la que asentaba sus mayorías electorales se ha desintegrado y adaptarse a ella le está resultando más difícil a la izquierda que a la derecha. Hay algo de verdad en tal apreciación. En aquella sociedad la izquierda reformista apenas intervenía en la producción de bienes y servicios. Centrada en la redistribución, edificó un estimable modelo europeo de bienestar. La cuestión es que el motor de la producción ha gripado y cuestiona la sostenibilidad del sistema. En esa tesitura, la derecha impone propuestas conservadoras al punto de hacer previsible y temible un futuro construido en base a sus ideas y con escaso protagonismo socialdemócrata.

Quizás estemos ante una fase coyuntural basada en el tópico de que la derecha gestiona mejor el crecimiento y la izquierda la redistribución, con lo que cabría esperar un cambio de tendencia con la recuperación. Tal vez, pero mucho tememos que sea algo más, una crisis histórica que reclama al socialismo adaptarse a nuevas realidades. Si así fuera no bastaría con organizar la espera defendiendo posiciones obsoletas, haría falta analizar esa nueva realidad y elaborar un discurso para situar los valores que identifican al socialismo democrático, es decir al que más allá de defender lo conseguido aspira a gobernar para construir un futuro más justo, en las nuevas circunstancias.

Este trabajo pretende reflexionar sobre ese paisaje a partir del caso valenciano. Una región de la periferia europea con los mismos problemas y desafíos socioeconómicos que la mayoría, pero con elementos singulares en el terreno político que merecen atención. Caso peculiar porque la derecha es hegemónica en una sociedad abierta y moderna que hasta hace poco cultivaba un equívoco pero arraigado imaginario hecho de materiales laicos y progresistas, con mayorías de izquierda. Una derecha conservadora cuyo éxito no se ha conseguido abriendo su discurso al centro sino aglutinando mayorías en torno a un partido, el PPCV, nucleado por su sector más conservador. Desde ese núcleo ha logrado proyectar como ideología dominante de la mayoría social, primero su discurso político y después su *relato* de la sociedad valenciana hasta el punto de contrarrestar sus sonadísimos casos de corrupción y su deficiente gestión de gobierno.

Así es. El electorado valenciano ha revalidado reiterada y mayoritariamente un modo de gobierno caracterizado por su discurso populista y sectario, trufado de casos de corrupción a veces rayanos en el esperpento y tan extendidos que incluyen a todas sus instancias causando sorpresa a propios y extraños. Sorpresa que ha hecho habitual preguntarse

dentro y fuera de esta Comunidad: ¿qué pasa en Valencia? Aproximarnos a una respuesta, forzosamente múltiple y matizada, es el propósito de este trabajo, continuidad del que hace tres años publicamos *–País Complejo–* ambos autores. Al respecto, nuestra hipótesis es más fácil de enunciar que de explicar. Porque desde luego no pensamos que se trate de una excepción aunque sí ofrece elementos anómalos ciertamente preocupantes. Es, tal vez, un caso de «tormenta perfecta» en el que hay variables propias como la cuestión identitaria, el fuerte clientelismo, el desarrollo de patologías indeseables y procesos de «captura» de políticas muy preocupantes, el bajo perfil de la oposición y otros que más que restar, añaden fuerza a unas razones que exceden a la coyuntura electoral y devienen estructurales. Pero visto en términos de comportamiento electoral, lo que aquí ocurre no difiere tanto de lo que sucede en el resto de Europa. La dificultad de la socialdemocracia europea para dar respuesta a la mengua y diferente composición de su electorado histórico la aleja de la posibilidad de protagonizar el futuro.

El ascenso de la socialdemocracia fue un producto histórico. Confluyó en ello el asentamiento de un sistema productivo industrial-fordista apoyado en el sector público, con unos definidos Estado-Nación como marco del éxito del keynesianismo económico y con la coincidencia de intereses mayoritarios en las clases trabajadoras y parte de las medias. Todo ello en un contexto de «guerra fría» que fraguó la imagen de una vía intermedia entre el capitalismo desregulado y el intervencionismo comunista. En la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, el proletariado industrial nucleó la formación social que alumbró ese gran pacto que es el Estado del Bienestar mediante las políticas expansivas y redistributivas de unos Estados prestigiados por sus buenas prácticas fiscales. El trabajo y la familia vehicularon los sistemas de protección y cohesión social que, con diferen-

cias internas, han permitido hablar de un «modelo social europeo». Trabajar con razonable seguridad de futuro, tener acceso a la sanidad para la familia, a la educación de los hijos, contar con expectativas de una jubilación segura... reivindicaciones convertidas hoy en condiciones habituales de una vida normal.

Hoy no es ese ni el esquema de vida ni la certidumbre de futuro. Los hacen inviables las transformaciones finiseculares. La mundialización de las relaciones mercantiles o financieras y el nuevo paradigma posfordista han diseñado un escenario incierto y tras la crisis, peligroso. Las políticas fiscales expansivas en un solo Estado acaban favoreciendo a competidores que en ocasiones practican casi un *dumping* social; en cuanto a los obreros industriales protegidos y sindicados, no constituyen hoy la mayoría de la clase obrera, ni siquiera su núcleo. Es más, en tiempos de flexibilidad, temporalidad, externalización y *outsourcing* son vistos como privilegiados por sectores del proletariado precarizado sobre todo en los servicios. Y si los receptores de las políticas socialdemócratas han cambiado, también lo ha hecho el marco geopolítico donde se decidían y se desplegaban. Hoy es imposible gestionar la crisis –en realidad la economía en su conjunto– a escala nacional y en Europa menos que en ningún lugar. Es más, si el marco normativo europeo no varía resulta poco menos que imposible articular políticas de izquierda para superar la crisis.

Tales cambios no caminan solos. Tampoco la familia es lo que era y no tanto por la actual diversidad de formas, que también, claro, sino porque hoy son necesarios dos sueldos y pocos hijos para no caer en riesgo de pobreza relativa. Todo se une para arrumbar la figura del que Esping-Andersen ha llamado el *male breadwinner* prototipo del trabajador clásico. Por no entrar aún en la evolución de las clases medias embargadas unas, las antiguas, por la quiebra de los valores

sobre las que basaban sus comportamientos o expectativas y otras, las asalariadas, que sienten la presión fiscal como puncción excesiva para los servicios que obtienen por lo que se sienten impelidos a adoptar actitudes individualistas. El propio Estado del Bienestar ha generado rigidez y burocratización en su funcionamiento, cierta desresponsabilización entre los ciudadanos y ha originado intereses corporativos. No es por lo tanto extraño que sea frecuente referirse a esta como una sociedad progresivamente individualizada. La fragmentación de esferas sociales socava los lazos de solidaridad de clase y debilita la existencia de valores comunes. En el pluralismo posmoderno no hay un sistema de valores aceptado mayoritariamente y declinan los viejos valores —solidaridad, compañerismo, conciencia de clase, ahorro, esfuerzo, mérito, cohesión familiar— frente al avance del consumismo, del éxito medido en dinero, de la competitividad y en general, del autointerés. Y todo ello en un clima de desconfianza, incertidumbre cuando no temor hacia el futuro.

¿Sociedad individualizada quiere decir sociedad «rechizada»? No, no quiere decir esto, por más que haya quien, como Simone, hable de la transformación del pueblo de izquierdas. Quiere decir que con las propuestas de antes no se convence a los electores de ahora. Porque los intereses no son tan comunes ni mayoritarios como antes, porque las reivindicaciones son otras y porque, en palabras de Judt, la política se ha convertido en un agregado de demandas diferentes, individuales, de corte identitario que debilitan proyectos solidarios de clase. En ese escenario, la antigua superioridad moral de la izquierda es inexistente y compite con una derecha que ha superado su desprestigio histórico entre las clases populares. Encontrar el espacio propio de la izquierda socialdemócrata, reeditar y articular una amplia base social para impulsar políticas redistributivas basadas en

una fiscalidad progresiva es urgente y posible. Porque el capitalismo será capaz de generar de nuevo riqueza tras la crisis pero no equidad en su distribución. Es más, los síntomas apuntan a lo contrario, a que la lógica de la desregulación prime sobre la de la cohesión social. Razón de más para urgir respuestas que potencien el avance de la igualdad por vías de solidaridad. Hará falta concitar consensos en torno a ese proyecto y para ello es imprescindible «represtigiar» la democracia. Porque la paradoja actual radica en que los ideales de protección por vía de solidaridad fiscal –educación, sanidad, paro, jubilación, servicios sociales– eran antes las reivindicaciones y hoy son condiciones de vida normal para jóvenes y no tan jóvenes. Por el contrario lo que la socialdemocracia pensaba consolidado, el sistema representativo, es lo que hoy se cuestiona. Con frecuencia se percibe como un sistema secuestrado por élites y en ocasiones corroído por la corrupción. Quizás porque pocas veces como ahora se ha constatado la impotencia de la política frente a intereses de sectores privilegiados, lo cual genera creciente desafección por la política como espacio de solución no solo a los grandes problemas del mundo (hambre, pobreza, medio ambiente...) sino a los domésticos (paro, inclusión social, fiscalidad...). Un reto común a derecha e izquierda: democracia y cohesión social.

No es de ahora que la socialdemocracia tenga en su agenda esta preocupación. La tercera vía británica, la Agenda 2000 alemana, el propio «adaptacionismo» francés fueron en su día intentos de actualización aunque a la postre quedaran en búsqueda de lo que Paramio llamó «ascensores sociales» que ampliasen la igualdad de oportunidades pero sin cuestionar la lógica de la producción y distribución capitalista o dicho por contraste, impedir que los «descensores sociales» amplíen los espacios de pobreza y exclusión social. Con mayor discreción, el socialismo danés acuñaba el con-

cepto de *flexiguridad* mientras los austríacos profundizaban en fórmulas de reparto del horario del trabajo como respuesta a las tensiones en el mercado laboral. Son propuestas sugerentes muchas de ellas pero sin un hilo conductor ni un denominador común que nos sitúe ante un proyecto global. Incluso cuando, ya redactadas estas páginas, el socialismo francés por boca de su candidato a las presidenciales, señala con razón al poder financiero como problema central de la actual crisis, desprende un cierto aire de *jacquerie* coyuntural más dirigida a evitar que parte de su electorado se refugie en expresiones populistas que a construir el nuevo *relato* socialista. Porque siendo verdad que ese conjunto de bancos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros y *hedge funds* especulativos que compran bonos del Estado y otros productos de Deuda Pública —por cierto, son bancos y fondos europeos los que más Deuda Pública europea tienen— imponen hoy condiciones de gobernanza, no deja de ser también verdad que seguir consumiendo bienestar a crédito significa darles el control de su sostenibilidad.

Porque lo esencial no es tanto averiguar cómo recuperar el poder político sino con qué mayorías sociales y con qué programas. Y descartada la opción de pretender dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo con soluciones de hace dos décadas, ello exige plantearse preguntas muy incómodas. La primera referida a la propia clave de bóveda del proyecto socialista: el Estado del Bienestar. Porque hoy las presiones para su recorte son tan fuertes como las que hay para su ampliación. La evolución demográfica y económica nos dice que habrá más viejos con más gasto en jubilaciones y sanidad, más pobreza, desigualdad y exclusión con riesgos para la cohesión social, más exigencia educativa para competir en mercados globales. Pero también mayores problemas para su financiación y para que su dimensión sea soportable, o sea para reducir su tamaño y seguramente sus

formas de provisión de bienes y servicios. Pensar que se va a poder seguir consumiendo bienestar a crédito sin ajustar sus dimensiones es suicida porque es mantenerlo al borde del colapso. Priorizar gastos, aligerar la burocratización del sistema e introducir reformas es obligado, pero tal vez insuficiente. Y ahí surgen esas preguntas incómodas ¿Es imprescindible identificar universalidad con gratuidad total? ¿No hay ámbitos de protección que puedan ser provistos por otras instancias de la sociedad? ¿No cabe aumentar la eficiencia del sector público restando burocracia? ¿La atención puede ser menos estandarizada y más personalizada?

Antes de suscitar la prevención de quienes identifican la defensa de lo público con la de su actual modelo (que dicho sea entre paréntesis difiere entre países en puntos tan esenciales como tipos de prestaciones, formas de provisión, niveles de copago u otros) subrayemos que no abogamos por un recorte del gasto sino por su racionalización e incluimos en ello el aumento del ingreso y de la justicia en el reparto de la carga tributaria. ¿No cabe una fiscalidad realmente progresiva y basada en el principio de capacidad de pago? ¿Debemos seguir soportando sobre las nóminas la presión fiscal y mantener el mito de que el dinero de los más ricos es riqueza productiva o patrimonio y se camuflen rentas en sociedades de privilegiado tratamiento fiscal? ¿No existen mecanismos de lucha contra el fraude y la deslocalización más efectivos y sin tanto esfuerzo y gasto burocrático? La experiencia de los países nórdicos indica que el Estado del Bienestar puede ser sostenible y que hay mucha gente dispuesta a contribuir a ello si se les demuestra que hay justicia en el reparto y se corrigen abusos y disfunciones. El fraude y la evasión fiscal son poderosos factores de desafección a la política, precisamente otro ámbito en el que urgen reflexiones: ¿nuestra democracia responde hoy a las crecientes expectativas de participación, representatividad y

transparencia?, ¿El Estado aparece como instrumento válido para evitar la deriva amoral de los mercados? ¿Cabe afirmar principios éticos en la economía de mercado?

Porque adviértase cómo más allá de los aires de resistencia o rebelión del movimiento de «indignados», sus demandas explicitan decepción de la política. Que lo es de parte sustancial de la juventud cuyas dificultades para elaborar proyectos vitales atractivos son mayores que las de sus padres. La juventud es hoy en sí misma una prioridad. Como lo es, por citar otro ejemplo y no menor, la gestión de la inmigración y la multiculturalidad. ¿Acaso la izquierda solo puede abordarlo desde el «buenismo» ignorando realidades económicas y relativizando valores sociales? Habrá que ahondar en el tratamiento de la inmigración pues nuestra envejecida sociedad la necesita pero la actual dificultad para crear empleo genera xenofobia y populismos. La socialdemocracia no puede aceptar que los caminos hacia mejores modos de gobernanza transiten fuera del sistema o, peor, que alimenten populismos.

Podría pensarse que las respuestas a tales preguntas exceden al marco regional en que situamos este trabajo, pero tal vez porque no se valore en toda su dimensión la potencialidad de la política autonómica. Hoy cuando las políticas estatales tropiezan con obstáculos insalvables para resultar determinantes, existen razones para pensar que el regional puede ser un espacio dirimente. La primera porque en regímenes federales o como el nuestro, federalizantes, es en ese ámbito donde se modulan y sustancian muchas de las políticas de bienestar que deben articular no ya un proyecto de partido sino de sociedad. Las sanitarias, las educativas, las de dependencia, las de servicios sociales, las de acogida e integración de inmigrantes... ofrecen un amplio margen de actuación que obliga a fijar prioridades a los gobiernos autonómicos y redundan directamente en los niveles de vida

y bienestar de los ciudadanos. Algo análogo podría decirse de las políticas económicas de obras públicas, de apoyo a las pymes o de empleo y singularmente del empleo para jóvenes, pues aunque en estos casos no existe una exclusividad competencial como en los anteriores, el margen es lo suficientemente amplio como para que la implementación de políticas adecuadas resulte dirimente en el desarrollo del País. Esta Comunidad, con un tremendo endeudamiento, tanto público como privado, con unas empresas con déficit de tecnología, productividad y tamaño, con unos servicios susceptibles de mejorar en calidad y productividad, con un sistema bancario del que han desaparecido Cajas y banca autóctona, con un proceso de intensa desindustrialización, con un problema de desempleo apabullante y casi la mitad de una generación de jóvenes sin expectativas, es un buen banco de pruebas para una socialdemocracia que no renuncie a protagonizar el futuro. Más aún cuando las fórmulas clásicas del intervencionismo keynesiano no encuentran hoy su mayor eficacia en el marco del Estado-nación sino en instancias superiores y en nuestro caso en la Unión Europea.

Pero es que la historia ha venido a subrayar una segunda razón al situar como un problema central de los valencianos algo unimaginable hasta hace poco tiempo. Rehabilitar su imagen y autoestima comunitaria. En este caso sí cabe hablar de anomalía y de situación de excepcionalidad. Porque a la referencia anterior a su situación económica actual cabe añadir la devastadora repercusión que sobre la imagen de una región con historia y voluntad de apertura al exterior han causado la corrupción, el despilfarro y el desgobierno de los últimos años. No insistiremos, por conocidos, en episodios rayanos en el esperpento que son reproducidos en medios de comunicación nacionales y extranjeros. Recuperar esa imagen no habría de ser tarea

específica del socialismo sino tarea colectiva. Surgiría de la propia sociedad civil. Pero es el caso que la sociedad civil organizada está literalmente ocupada por los partidos políticos. Consejos, Cámaras, Cajas, Asociaciones, clubes, etc., a poco que tengan vínculos con la Administración, son controlados por el partido gobernante o en el mejor de los casos, repartidos en cuotas partidistas. En ese contexto, reconstruir un relato identitario integrador y no excluyente, mayoritario y no parcial, moderno y no rancio de la sociedad valenciana implica tejer espacios de encuentro y articular consensos amplios. La polarización es un camino equivocado. Crispar y radicalizar actitudes y conductas nunca ha sido siembra de soluciones; al contrario, quiebra diálogos y fuerza adscripciones. Es una técnica electoral perversa dirigida a obligar el alineamiento del mayoritario electorado centrista o peor aún, a su alejamiento de la política.

Pero entre la particular y excluyente visión de parte de la derecha (no de toda) y la propensión fundamentalista de parte de la izquierda (no de toda), el esfuerzo por ampliar espacios de consenso debería recaer en el socialismo valenciano. Como ya hizo en los 80 al entender que el autogobierno requería apoyos mayoritarios. Hay que reivindicarlo como éxito pues democracia, cohesión social, autogobierno e integración europea constituyeron el proyecto más parecido a un proyecto compartido e ilusionante que los valencianos hayamos tenido.

Cierto que existe algo más que una incógnita sobre el socialismo valenciano. Este mismo año otros dos partidos de izquierda –Esquerra Unida y Compromís– han aumentado su voto –más joven que el del PSPV– hasta hacer creíble la posibilidad de un *sorpasso* conjunto. Si la sangría de votos persistiera, aumentaría la irrelevancia política del PSPV y en la misma medida debilitaría su posición mediadora en la articulación de esos consensos básicos necesarios para

construir un futuro del País compartido mayoritariamente. ¿Hay suficientes mimbres en el PSPV para tanto cesto como la historia le demanda hacer? Seamos sinceros, no lo parece. A un partido cuyo devenir por la oposición ha acentuado su endogamia hasta separarlo de la sociedad civil, incapacitarlo para integrar líderes sociales, reducir su militancia a extremos preocupantes, impedir una buena selección de dirigentes, anular su credibilidad como alternativa de gobierno, provocar su vacío ideológico e identitario y como consecuencia de todo ello, hacerle perder gran parte de su electorado y más aún, de su poder institucional, no debiera pedirle tanto. A los retos que tiene toda la socialdemocracia europea, de por sí ingentes, habría que sumarle el de una profunda transformación ideológica, organizativa y quizás humana. Demasiado, tal vez. Mejor una larga estancia en el sanatorio si logra evitar la UCI.

Pero es que la historia es así. La crisis tiene recorrido para destruir aún más gobiernos y el valenciano del PP podría estar entre los primeros. Como quiera que no es previsible la aparición de un nuevo partido de centro con presencia suficiente, que la «marca» PSOE tiene innegable fuerza y que tejer consensos es menos fácil desde izquierdas con mayor carga de radicalismo, no es descabellado suponer que podrían concurrir circunstancias para dar protagonismo al PSPV. Lo mismo que la posmodernidad impulsó la individualización en valores y comportamientos, esta nueva época generada por la crisis puede volver a poner el foco en la cohesión social, en la redistribución fiscal e incluso en el papel del Estado. Si así fuera, el socialismo democrático debería estar en primera línea. Hoy su opción no es tanto la recuperación de una mayoría absoluta de otra época sino la de acertar el camino para ser nuclear en la izquierda o, en otro caso, ahondar su irrelevancia social y política. Si no asumen que algo ha cambiado en la percepción de amplios

sectores de votantes progresistas, para los que la imagen de ese partido ha perdido gran parte de su componente de alternativa de gobierno en la Comunidad Valenciana; si persisten en su esfuerzo por mantenerse aislados, sin partido, sin proyecto y sin liderazgo claro, no solo no recuperarán la confianza de su electorado «natural», tarea ya en sí misma compleja incluso en las mejores condiciones, sino que pueden seguir perdiendo apoyo en las urnas. Justo cuando su protagonismo y concurso se hace más necesario. Porque frente a la doble ofensiva contra el Estado del Bienestar y el Estado Autonómico que cierta derecha (la FAES ya trabaja en ello) ha lanzado, la posición no puede ser sino la defensa crítica de un modelo social que es lo mejor que tiene Europa y cuya sostenibilidad demanda defensa pero también reformas.

I

LA RECOMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA

Tres décadas desde que los valencianos reencontramos el autogobierno. Nos había «sentado» bien, al menos así lo parecía hasta que la crisis hizo retroceder nuestra renta y bienestar y destapó limitaciones en nuestro modelo productivo. Hasta entonces con millón y medio más de habitantes, el Índice de Desarrollo Humano –media de indicadores de salud, educación y bienestar material– había pasado del 0.846 al 0.938 (Herrero, Soler, Villar, 2010: 227) y la renta *per cápita* alcanzó a ser el 83% de la media de la Eurozona lo que nos incluyó en el selecto club de los países desarrollados aunque en su banda más baja. No es que sea una experiencia singular y ni siquiera destacada. De hecho ese incremento de renta es inferior a la media española (en 1980, era el 98,8%, en 2007 el 90,2%) en parte debido a un robusto crecimiento demográfico basado en la inmigración. Ese retroceso relativo no empañó la percepción de que fueron tiempos en los que aumentó nuestro nivel de vida. Y que esa percepción tuviera base real. Cuando viajamos a Europa, y nuestros estudiantes lo hacen casi en masa, no nos asaltan los complejos de años atrás, al ver cómo aquellos

extranjeros consumían bienes distintos, se beneficiaban de mejores servicios públicos o privados y organizaban su vida en un marco de libertades.

No ha sido un proceso lineal. En sendas fases esta sociedad se ha visto impelida a redescubrir, en conexión con la evolución española, espacios propios en escenarios nuevos y en esa misma medida a rediseñar sus territorios económico, social y político. La primera fase fue cuando, tras «la crisis del petróleo», la economía española afrontó su integración en el mercado europeo. La segunda, cuando tras otra crisis –la del 93, intensa aunque breve– el avance de la globalización cuestionó la continuidad del modelo. No es casual que cada fase haya tenido una dirección distinta. Las políticas públicas –de los gobiernos central y autonómico– han sido determinantes. Al PSOE correspondió liquidar tareas pendientes en la superación de la crisis del petróleo, integrar al país en la CEE, universalizar el sistema de protección social y articular el régimen autonómico. Al PP, culminar el proceso de Maastricht y consolidar una fase alcista que pareció resolver asignaturas pendientes como el déficit público o la creación de empleo. Solo lo pareció. A partir del 2008 se abriría una tercera fase que nos exigirá dedicar epígrafe aparte a una crisis económica que en el caso valenciano adquiere entidad propia revelando la fragilidad de las bases de nuestro desarrollo y abriendo interrogantes aún por responder.

De la reconversión industrial a la burbuja inmobiliaria

La «crisis del petróleo» cuestionó el modelo desarrollista de los 60 y evidenció lo obsoleto del régimen franquista y su falta de cohesión social. Porque aparte de enfrentarnos

a la factura energética, la crisis supuso la caída de las exportaciones, la merma de turistas y el retorno de muchos de nuestros emigrantes, o sea la liquidación de las bases exteriores de nuestro crecimiento. La salida pasaba por integrarse y competir en la CEE, lo cual era imposible sin previas reformas estructurales en el aparato productivo, en el financiero, en los monopolios, en el mercado laboral y, claro, en la homologación del sistema político. Doble crisis, la económica y la política, pero solo una cuestión en el fondo: la modernización de toda una sociedad. No fue fácil atajar la inflación, mejorar la eficiencia productiva, ajustar plantillas, moderar los salarios, reconvertir sectores industriales, asumir la Política Agraria Común, introducir una fiscalidad con capacidad recaudatoria y redistributiva, sanear la Banca, etc., etc. Un proceso que causaría víctimas y para negociar el cual faltaban marcos de interlocución entre agentes económicos y políticos a fin de lograr consensos en torno a prioridades inversoras y compensaciones para quienes habían de padecer los costes.

Los Pactos de la Moncloa sustanciaron lo más importante del programa de reformas en sus ámbitos económico y de cohesión social. Eran otros tiempos, con mecanismos que hoy no existen –moneda nacional, recorrido fiscal del nuevo impuesto sobre la renta, expectativas de ingreso en la CEE, consensos básicos– y se revelaron cruciales para superar la crisis. No procede aquí el análisis de las políticas españolas de la transición (una síntesis reciente en Betrán, Cubel, Pons y Sanchis, 2009) cuanto el de su acompañamiento, no siempre armónico, por las autonómicas. Una cuestión decisiva porque aquel proceso reformista no se limitó a promover una profunda reestructuración del aparato productivo y financiero sino que tuvo como prioridad de la democracia, la reestructuración del Estado en el ámbito territorial. Y las autonomías devinieron básicas en la provisión de los servicios del Estado